



Nº 38 // Septiembre 2024

EL NUEVO CURSO

CORRIENTE OBRERA REVOLUCIONARIA

PUBLICACIÓN PERIÓDICA - \$ CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

Ley Karin

“no es talla”

**es política
reaccionaria**

Páginas Centrales

**Entre la decacencia del régimen
y los intereses del imperialismo**

Página 7

CORTES DE LUZ

ABAJÓ

EL SUBCONTRATO

Página 2

EDITORIAL

**Gobierno de
Boric,
Cada vez
más servil al
imperialismo**

Página 3

**CIERRE DE SIDERURGICA
HUACHIPATO**



**EXPROPIAR A LOS
EXPROPIADORES**

**¡Frenemos el genocidio en Gaza!
¡Por la destrucción del enclave sionista de
Israel!**

contratapa <<



INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN CRISIS

¡Abajo la subcontratación!

Impulsemos un congreso obrero para superar la fragmentación de nuestra clase y enfrentar la anarquía y explotación capitalista

Se generó un apagón generalizado en vastas zonas del país, que trajo aparejado caídas de árboles, cableados, lo que se tradujo en que la población se mantuvo semanas sin luz. El gobierno se apresuró a presionar a las empresas que monopolizan la distribución de energía eléctrica, principalmente a ENEL de capital estatal italiano y CGE empresa de capitales chinos, ante la premura de reponer el suministro en las empresas y en las comunas donde habita la burguesía del país.

Boric, para la prensa balbuceó un aviso Enel y la posibilidad de revisar su concesión, pero más que nada buscaba reubicarse ante la inacción de un gobierno servil ante los intereses empresariales. Donde sí se muestra enérgico es en sus constantes posicionamiento en favor de la represión (mayor dotación de policías, ley gatillo fácil, de infraestructura crítica, militarización, encarcelamiento de militantes de la causa mapuche y luchadores sociales, ley antitomas, desalojo de tomas y destrucción de sus viviendas) y el alineamiento con el imperialismo.

Esta falla de la infraestructura, mantenimiento y retraso en la reposición del suministro, se dio en el momento en que las empresas eléctricas ven aumentar sideralmente sus ingresos por las alzas en el cobro de la luz. La burguesía y el gobierno vienen plateando una política de compensaciones en contra de las empresas de suministro de energía aumento de multas, y subsidios ante estas alzas. Sin embargo una vez superado el grueso de la crisis (al cierre de esta edición aún hay barrios sin suministro), el gobierno archivó las amenazas de revisar concesiones y sólo barajan un proyecto para subdividir la distribución eléctrica para introducir "competencia al sistema", pretendiendo eximir de responsabilidades a las grandes generadoras.

Estas empresas vienen embolsándose jugosas ganancias, debido a la explotación de la fuerza trabajo mediante la externalización de sus funciones como la reposición, construcción, instalaciones, y reparaciones de las redes de distribución de energía eléctrica, los que están sujetos a presiones con extras, arbitrariedad de las de la empresa, trabajo inseguro, despidos, etc, todo para cumplir con las "instrucciones" y satisfacer a las mandantes.

Enel como otras patronales llevan a cabo la explotación por intermedio de empresas contratistas y

subcontratistas que son las encargadas de hacer el trabajo sucio en contra de los trabajadores, contra sus organizaciones sindicales donde las hay o accionando contra la creación de las mismas, dividiendo a nuestra clase en trabajadores de primera, segunda y tercera categoría. Así como ocurre en telecomunicaciones, ocurre en la minería, forestales, educación, construcción, etc, etc, donde se impone este flajelo que apunta a la fragmentación de nuestras filas.

por el gobierno con la represión directa de carabineros y posterior intervención como intimidación de los militares.

Este "apagón" mostró la anarquía capitalista, que no es capaz de proporcionar a la población el suministro continuo de electricidad y, más aún, no es capaz de solucionar el problema de reponerlo, ya que incluso la organización del trabajo se realiza sobre la base de la superexplotación de la clase obrera.



Debemos recordar que ENEL es la continuadora de Chilectra empresa mandante de la contratista AZETA donde trabajaba el dirigente obrero Juan Pablo Jiménez que luchaba para poner fin a la subcontratación levantando una federación de sindicatos de la rama. Juan Pablo fue asesinado, "por una bala loca" dijeron, y la justicia burguesa archivó el caso sin responsables. Tampoco debemos olvidar que la subcontratación comenzó a generalizarse cuando la burocracia sindical de la CTC (dirigida por el PC) traicionó la huelga de trabajadores subcontratistas de la minería el 2007 donde impuso la ley de subcontratación (Bachelet I) que amplía y legaliza esta forma superexplotación de la fuerza de trabajo.

Durante el prolongado tiempo de estar sin luz comenzaron a desarrollarse de manera espontánea y semi espontánea protestas en distintas poblaciones de la Región Metropolitana, con barricadas, cortes de calle, las que fueron respondidas

Tampoco es una salida el control estatal como pregonan los populistas y reformista, ni con el mote de "bajo gestión de los trabajadores y/o con coordinación de los usuarios" como lo plantea el centrismo trotskista, bajo una idea redistribucionista.

Es la clase obrera de la rama de las telecomunicaciones mediante sus sindicatos los que deben imponer el control obrero a la patronales mandantes ENEL, CGE, estatales y otras, para organizar el trabajo ya que son los obreros de la rama los que mejor conocen el trabajo a realizar, poniendo en función de garantizar el suministro de electricidad a la población obrera y del pueblo, asimismo imponer escala móvil de salario y de horas de trabajo, estableciendo protocolos obreros de seguridad y salud, para aquello es necesario impulsar la convocatoria un congreso obrero de la rama con delegados con mandato para discutir un plan de lucha.

Gobierno de Boric, Cada vez más servil al imperialismo

El gobierno de Boric viene llevando a cabo su derrotero de ser un fiel sirviente del imperialismo norteamericano. Éste busca retomar las manijas por completo, y no ver mermada su hegemonía sobre su “patio trasero” latinoamericano, reforzando la idea de una mayor intervención militar para el control interno en los países semicoloniales. Las distintas fracciones de las subburguesías de la región buscan reacomodarse ante un nuevo escenario electoral en EEUU donde ninguno de los candidatos, ni Trump ni Harris, ofrecen una orientación clara para mantener a EE UU como la principal potencia.



En su crisis histórica, el imperialismo ha venido empanatándose en la Guerra Rusia – Ucrania donde busca asimilar de manera catastrófica al sistema capitalista mundial a estos ex estados obreros, así también ha visto debilitada su posición al mantener el apoyo al genocida enclave de Israel. La supervivencia del sistema capitalista, se mantiene principalmente por la crisis de dirección del proletariado, única clase progresiva capaz de dar una salida.

Como marco de esta orientación está la reciente y tercera “visita” en lo que va del año de Laura Richardson (generalista yanqui del comando sur quien fue piloto en Irak y Afganistán) a propósito de la Conferencia Sudamericana de Defensa que busca asentar de manera militar su dominio en el llamado triángulo del litio que involucra a Argentina, Bolivia y a Chile. Sin duda los gobiernos de esos países compiten en quien es más servil al amo del norte, por eso buscan imponer planes ajustes contra la clase obrera, atacando las condiciones laborales de los trabajadores.

¿Se puede ser más cínicos? El gobierno de Boric y la burguesía mientras rasgas vestidura contra la “dictadura” de Venezuela, recibe con alfombra roja (incluyendo la nieta, ministra Maya Fernández) a milicos yankis que son los principales instigadores y perpetradores de genocidios, dictaduras militares impuestas mediante golpes contrarrevolucionarios que aniquilaron a la vanguardia obrera, como ocurrió en Chile en el 73 dando inicio al Plan Cóndor, así como sostienen a los genocidas israelíes que ocupan Palestina.

Estatismo de manos vacías

El gobierno viene buscando fortalecer el papel de las instituciones estatales y de la burocracia sindical. Ese es el sentido del fortalecimiento de la Dirección del Trabajo para intervenir como mediador por ejemplo en la reciente ley Karin (ver páginas 4 y 5); intervención de la justicia burguesa; intervención a través de los ministerios. Ejemplo de esto son lo siguiente:

- Huelga de trabajadores de la federación de Walmart, intervención de la DT de conjunto con la burocracia sindical (Ver declaraciones en trci-web.org/cor-chile);
- Paro de los portuarios de Coronel, intervención del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (a 10 trabajadores que se le abrieron causas penales);
- Paro docente de Atacama, intervención del Ministerio de Educación;
- Huelga minera caserones de la compañía Lundin Mining, interviene tribunal de Copiapó decretando el desbloqueo de caminos, inmiscuyéndose en los métodos obreros.

Se debe sumar a esta batería de leyes contra la clase obrera la que flexibiliza la jornada laboral (40 hrs) que permite a los patrones contar con disponibilidad a su antojo de horas de fuerza de trabajo, que en la práctica ha extendido las jornadas e intensificado los ritmos de producción. A esto hay que sumarle

el aumento del empleo informal y la subcontratación, que la legalidad burguesa consagra y regimenta, lo que amplía la precarización y fragmentación de nuestra clase.

La pretendida política “más social” del programa del gobierno viene quedando “relegada”, dando prioridad a la “agenda de seguridad”, que no es más que un despliegue represivo. Con desalojo de campamentos, con allanamientos en Villa Francia ad portas de conmemorarse un aniversario del fallecimiento de Luisa Toledo, reforzamiento del contingente policial, militarización permanente de la Araucanía, mayor intervención militar como en los recientes cortes de luz, represión contra estudiantes secundarios y recientemente contra las trabajadoras de Junaeb.

El no cumplimiento de promesas de campaña de Boric tales como la reforma jubilaria, pago de la deuda histórica de los docentes, o condonación del CAE, le quita la base social del gobierno que se apoya en sectores de la pequeña burguesía y de la burocracia sindical. No es por “presión de la derecha” que no puede llevar adelante este programa reformista, es la crisis del capitalismo y la descomposición del estado semicolonial lo que deja al desnudo el carácter reaccionario del gobierno “progre”.

Preparemos la salida revolucionaria

Ante un escenario de crisis, los revolucionarios debemos retomar las tareas preparatorias para la toma del poder y la revolución, impulsando un programa transicional como el control obrero de la producción que ataque las leyes del capital y dispute la dirección de la sociedad a la burguesía.

A 51 años del golpe contrarrevolucionario no olvidamos, no perdonamos, ni nos reconciliamos. Buscamos organizar la revolución proletaria mundial, y para ello levantamos las banderas de la refundación de la Cuarta Internacional •

Ley Karin: “no es talla”, es política reaccionaria

A principios de agosto comenzó a regir la llamada “ley Karin” que pretende dar respuesta a las situaciones de “acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo”.

Su nombre se debe a la trabajadora Karin Salgado quien el 2019 se suicidó. Karin desempeñaba sus funciones como técnico de enfermería en el ala pediátrica del hospital de Chillán. Karin fue acusada y hostigada por los directivos del hospital de haber sustraído una caja con elementos de curaciones. Encerrada en interrogatorios, la directiva del hospital siguió “su casa de brujas” difundiendo que Karin habría implicado a otras trabajadoras en este “terrible hecho delictual”, lo que llevó lógicamente a roces entre sus compañeros de trabajo. Luego de continuar con los procedimientos burocráticos del aparataje estatal, fue sentenciada por el sumario a quedar relegada en otra área del hospital percibiendo la mitad de su sueldo, el que ya apenas superaba el sueldo mínimo. Karin apeló la decisión a otro organismo estatal, la Contraloría, quien rechazó sin más dicha apelación por “ajustarse a procedimiento”. El día que era retirado cadáver de Karin del

mismo hospital, los directivos festejaban con algarabía un cumpleaños, emulando en este gesto el desprecio y desdén con el que la burguesía mira a la clase explotada.

La lucha de sus compañeros de trabajo y familiares devino en el eventual traslado de estos burócratas estatales y a que su caso fuera manipulado por los partidos burgueses y pequeñoburgueses quienes, desviando la atención de la situación de opresión que se impone a los trabajadores, impulsaron un proyecto de ley de contenido “identitario” que le otorga más poder a la patronal y a la burocracia estatal para perseguir y castigar a los trabajadores.

En concreto y en resumen la ley establece la obligatoriedad de las empresas e instituciones estatales de establecer protocolos de denuncia que, con la intermediación de organismos estatales como la dirección del trabajo, activen procedimientos que puedan terminar en sanciones. En la práctica todo trabajador sabe que denunciando a algún jefe en un caso de hostigamiento o abuso laboral, puede eventualmente éste ser removido o apercibido de algún modo, pero al trabajador le quedan los días contados para su despido. Si la denuncia apunta contra otro trabajador, el accionar de la patronal llevará a la sanción y eventual despido del/los trabajadores involucrados, y casi por regla general el denunciante también tiene sus días laborales contados. En rigor, esta ley no sólo no apunta a dar respuesta a una situación como la vivida por Karin sino que ésta se agrava al entregar más herramientas al despotismo patronal.

Ya se comenta en el ámbito sindical que esta ley también puede ser usada por las patronales, quienes activarán estos protocolos ante discusiones fuertes que puedan tener representantes sindicales que denuncien cualquier injusticia laboral, lo que puede llevar al quite de fueros de dichos dirigente y su eventual despido sin indemnización. Es decir, un incremento de la injerencia del Estado en nuestras organizaciones y lugares laborales para regimantar la relación capital trabajo, ampliando el ámbito de dominio del capital.

¿Ley Karin en educación?

Desde el colegio de profesores se desarrolló un paro el pasado 7 de agosto, ante las reiteradas situaciones de agobio laboral, exigiendo la aprobación de una ley complementaria, que extendería los mismos principios de intervención y protocolo estatal al ámbito del “estatuto docente” que regimenta la relación laboral de los trabajadores de públicos de la educación. La burocracia sindical llevando la lucha a las vías de conciliación con su gobierno, exige una mayor intervención del aparato de estado ante situaciones de “violencia”. Para escudarse en su inacción ante el conjunto de la degradación del sistema educativo, la burocracia habla que existen “otras violencias”, como la deuda histórica, las condiciones laborales, reconocimiento de categorías, infraestructura en crisis, etc, sin establecer una sola medida contra estas condiciones, colocando como prioridad la llamada “salud mental” individual como si esto pudiese tener algún significado en un sistema de explotación y en descomposición.

Además de establecer procedimientos similares a los de la ley Karin el “proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas” apunta a fortalecer los reglamentos internos RICE en las escuelas para la persecución y expulsión de estudiantes.





RICE, el instrumento preferido de los boriclovers para aplicar la piñerista aula segura

Ya con el gobierno de Piñera se había avanzado en la ley “J” aula segura, procedimiento por el cual se expulsa continuamente a estudiantes que se organizan y salen a la lucha. Durante el actual gobierno de Boric, no sólo la represión estatal contra la juventud se ha mantenido y profundizado, sino que se ha instruido a los directivos

la aplicación de los RICE, la que ha llevado a la suspensión y expulsión de estudiantes con motivos tales como convocar a asambleas, estableciendo regímenes persecutorios al interior de las escuelas. La “ley antitomas” no se ha dirigido exclusivamente contra las familias que habitan campamentos sino también contra las tomas de escuelas y universidades. Este ha sido un complemento muy útil para la aplicación de la ley aula segura, que según los propios informes estatales, los estudiantes expulsados de los establecimientos han aumentado en un 70% en los últimos 2 años.

El nuevo proyecto no sólo potencia, sino que obliga a la intervención de organismos de persecución como el ministerio del interior, la subsecretaría de prevención del delito, el de seguridad y el de justicia, con la anuencia de la mal llamada “defensoría de la niñez”.

El gobierno del FA-PC y demás Concerta, conocen perfectamente la potencialidad que tiene el movimiento estudiantil para expresar de forma explosiva como contundente, las contradicciones de clase, abriendo la posibilidad de la intervención de la clase trabajadora, como lo recordamos durante el estallido.

Por ello es que, junto a la burocracia estatal y sindical, se propusieron perseguir, reprimir y castigar cualquier atisbo y forma de lucha y organización.

Esto expresa a cabalidad el carácter de clase de la educación en el sistema capitalista así como la necesidad de disputar la orientación del sistema educativo mediante la lucha por imponer el control de los trabajadores del conjunto de la educación.

Es necesario que los docentes y trabajadores de la educación impongan en las organizaciones obreras una línea de independencia de clase que apunte a romper los lazos con el estado. Es preciso que seamos nosotros, mediante nuestras organizaciones como los sindicatos y los centros de alumnos los que **impongamos nuestros propios protocolos** por fuera del control del estado y la patronal. Tanto en el ámbito educativo como en el laboral y sindical. El derecho a la organización y expresión de la juventud debe defenderse como una prioridad en un sistema que no tiene ninguna perspectiva de futuro, que junto con una actitud activa de los docentes y trabajadores de la educación, pueden hacer de “la escuela y el proceso educacional un laboratorio creador de conciencias revolucionarias”^[1].

[1] Tomado de “La reglamentación del artículo tercero constitucional”, León Trotsky 1940



EXPROPIAR A LOS EXPROPIADORES

A principios de año la patronal del Grupo CAP S.A. consiguió alinear a la burocracia sindical para movilizar a los trabajadores bajo la consigna “Chile sí, China no”, exigiendo la imposición de sobretasas a la importación de barras y bolas de acero que estarían impulsando la posibilidad de cierre. De esta forma, la patronal, azuzando el inminente riesgo de cierre de la planta siderúrgica de Huchipato (CSH) y la subsecuente ola de despidos y crisis social en la región, consiguió mediante la presión obrera que el organismo estatal (“antidistorsiones”) impusiera dichos aranceles.

Luego de unos meses, con el cinismo característico de la burguesía, anuncian “una decisión tremendamente dolorosa” que es el cierre definitivo de la planta siderúrgica altos hornos para mediados de septiembre y la planta de coque para octubre. Como comentamos en “El Nuevo Curso #37” este cierre no sólo golpeará sobre los más de 2200 trabajadores de CSH sino a trabajadores tercerizados, subcontratados y de empresas relacionadas que se calculan en unos 20 mil puestos de trabajo, lo que llega a 80 mil en el Gran Concepción según algunas estimaciones del impacto indirecto del cierre.

El Grupo CAP S.A. aduce pérdidas millonarias de su filiar, sin embargo su Ebitda (ganancias antes de impuestos, amortizaciones, etc.) aumentó en 61,8 % en relación a 2023, siendo ellos mismos, grupo controlado por la japonesa Mitsubishi y demás parásitos capitalistas, los principales acreedores de la siderúrgica. Es decir, pese a que ven multiplicarse sus ganancias extraídas de la explotación obrera, deciden “sanear” sus cuentas a costa de generar una crisis social de importantes proporciones.

El cierre de la compañía no moverá la aguja en la rama ya que Chile exporta el 0.14% de la producción mundial de acero, mientras importa un 0.33%. El peso específico en la rama lo tiene China como principal consumidor y exportador. Sin embargo la descomposición capitalista y los problemas de la asimilación de este exEstado Obrero, lo tiene en niveles de

crecimiento decrecientes, paralizando obras de infraestructura y construcción como lo evidencia la crisis de su burbuja inmobiliaria. La baja del precio del acero (que dicho sea de paso se ha situado en niveles pre pandemia donde en 2021 llegó casi a duplicar su cuantía) se explica en parte por los escenarios recesivos en distintas partes del mundo, pero también por su valor de producción, por la sobreexplotación de los trabajadores del acero chinos cuyos salarios bordean los U\$ 200.

El saneamiento de cuentas decidido por los accionistas también está motivado por una contracción de sus operaciones en otras filiales como en Argentina y Perú, donde la crisis capitalista junto a las políticas de ataque a los trabajadores está paralizando proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

En resumen No es verdad que el cierre esté motivado por la oscilación de precios del acero, del que dicho sea de paso el grupo CAP se estuvo beneficiando importando acero desde su filial en Hong Kong, sino que esto es derivado del control monopólico por medio de las sociedades por acciones y el capital financiero de los medios de producción, que llevan adheridos al cuerpo la anarquía capitalista.

Por su parte la burocracia sindical, luego de tomar cafecito con gerentes y ministros de estado, no realizó una sola asamblea para decidir los pasos a seguir y las medidas de lucha, comunicando que “esta decisión es irreversible”, regateando mejoras en los finiquitos, traslado de trabajadores miles de kilómetros hacia otras regiones, y capacitaciones para que este sector de la clase obrera se diluya en el pauperismo pequeñoburgués de los “miniemprendedores”, que no es más que un eufemismo de cesantía y precariedad.

En un escenario preelectoral no han faltado las voces de los políticos burgueses y pequeñoburgueses plantean la necesidad de que Corfo compre acciones (PC), señalado como anticonstitucional, o que se cree una siderúrgica estatal

(PS), o que el problema se resuelve eliminando la “permisología” (DC) que tendría trabados proyectos de autopistas, rutas, puentes o proyectos inmobiliarios. Esto último no va dirigido a Concepción, sino a las inversiones mineras que se encuentran limitados por resguardo de humedales o por impactos de los desperdicios industriales y ese tipo de “escollos burocráticos”. Juegan con la idea de recuperar el supuesto carácter “nacional” de una empresa creada por el estado a mediados de siglo pasado que fue privatizada totalmente por la dictadura pinochetista, sin que su servilismo a la propiedad privada capitalista los lleve ni un paso más allá.

Organizaciones del centrismo trotskista como el MIT o el PTR llaman a “defender la industria nacional”, como si las fuerzas productivas tuvieran una base nacional, negando el carácter internacional de las mismas y con ello de nuestra clase. En el mismo sentido van sus propuestas de “estatización” que abogan por una redistribución de la riqueza por medio del aparato estatal que no es más que una forma de dominación del imperialismo, que manifiesta su descomposición en la crisis de los semiestados.

Es necesario organizar a nuestra clase, convocando a un **Congreso de delegados Obreros de la rama del acero y la minería** que pueda poner en pie un plan de lucha con nuestros métodos para impedir el cierre. Esto debe llevar a medidas decisivas como la toma de la planta y el impedimento del cierre de los hornos. Hay que levantar la necesidad de **expropiar al grupo CAP** levantando comisiones que ejerzan el control obrero de la producción, exigiendo el desarrollo de un plan de obras públicas, confiando sólo en nuestras fuerzas para imponerlas y no en los cantos de sirena de los proyectos de ley o reformas constitucionales. Esta y otras medidas no pueden estar escindidas de una lucha abierta de la clase trabajadora contra la patronal y el Estado garante de la explotación, de este modo forjaremos nuestras fuerzas en el camino de la lucha por el poder obrero. ■



ENTRE LA DECADENCIA DEL RÉGIMEN Y LOS INTERESES DEL IMPERIALISMO

VENEZUELA



Desde el 28 de julio donde se realizaron elecciones presidenciales en Venezuela, se ha abierto una disputa entre el gobierno de Maduro, y la oposición que proclama ganador a Edmundo González.

La disputa abierta no se encuentra ya en las urnas, la legitimidad del proceso, o la verificación del resultado, sino en que distintas facciones de la subburguesía venezolana, alineadas con el imperialismo, pugnan cual debe ser la relación de Venezuela con éste en medio de su crisis y descomposición, así como el desgaste del régimen en su relación con las masas ante la agudeza persistente de la crisis social.

El resultado aún incierto sobre todo para la oposición, complica la política del gobierno de Biden hacia Venezuela, donde pasó de reconocer el triunfo opositor a pedir la intermediación de los gobiernos de México, Colombia y Brasil. Sin dejar de apostar al desgaste, por declaraciones de “comités de expertos” de la ONU, la administración yanqui no apuesta a abrir un conflicto que puede terminar como el desdibujado “gobierno interino” de Juan Guaidó, ni se inclina de momento por una intervención de tipo militar, algo que podría incidir en la coyuntura de las presidenciales norteamericanas.

El “acuerdo de Barbados” de Octubre del 2023 fue el “vamos” dado a las empresas petroleras yanquis y europeas, para retomar sus “joint ventures” con PDVSA. Justamente Chevron es la que tiene actualmente los únicos 2 taladros petroleros funcionando lo que es tenido en cuenta en sus cálculos políticos.

Si bien los gobiernos como los de China y Rusia, reconocieron la victoria de Maduro, lejos están de ser un contrapeso dado que la relación con estos exestados

obreros se ha diluido en un parasitismo casi endémico de la “subburguesía” venezolana con importantes elementos de corrupción.

La puja de la oposición con vínculos más directos con EEUU por intentar eclosionar al régimen y colocar un “gobierno de transición” alineado a los intereses yanquis, pretende continuar con el impulso de movilizaciones internas y de los emigrados. Sin embargo, el régimen chavista, por medio del PSUV y de las instituciones estatales que controla, también coloca en las calles a miles “en defensa de la paz” denunciando un “complot fascista proimperialista.”

Los gobiernos de Petro y Lula desean tener un rol de negociador moderados ante el imperialismo. La vía de la negociación, de no mediar una profundización de la crisis, agudizamiento de la lucha de clases, o un giro en la administración imperialista con un eventual triunfo de Trump, probablemente seguirá la senda de una apuesta por deslegitimar a Maduro a partir de enero, o un acuerdo de garantías electorales para las elecciones regionales y legislativas del año próximo.

La leve reanimación de la producción y el precio del petróleo, junto con la dolarización de facto de la economía, y la apuesta de un sector burgués de recuperar sus negocios con la devolución de algunos inmuebles y empresas expropiadas por el chavismo, han moderado la estratosférica inflación de hace unos años, así como se ha producido una incipiente recuperación en salarios y beneficios. Sin embargo, la crisis social es de tales proporciones que tiene a más del 80% de la población sumida en la pobreza con los sistemas de educación y salud pública en colapso, con salarios que no llegan ni a la mitad de una canasta

básica familiar, y con una alto nivel de precarización e informalidad.

Lamentable rol el de las corrientes centristas que propugnan una “defensa de la democracia” exigiendo recuento de votos, actas o transparencia. Como si la elección en sí pudiera reflejar alguna suerte de “voluntad popular” o, lo que es peor, como si alguna de las facciones en disputa pudiera expresar alguna salida para la clase obrera. Esto no es más que la fiel expresión de la adaptación a la democracia burguesa y sus mecanismos.

En el mismo sentido obran aquellos que expresan una posición campista, eligiendo el régimen de Maduro como el “campo” desde el cual dar la lucha por el socialismo.

El régimen venezolano, surgido del seno de la fuerzas armadas, y mediante la estatización y cooptación política de amplios sectores, con la formación del PSUV devenido en el aparato político de la burocracia estatal, manifiesta una de las expresiones más agudas del bonapartismo sui géneris, con el llamado a la “unión cívico-militar” cohesiona al aparato burocrático militar del semi-estado.

La más intransigente independencia de clase para que intervenga el proletariado, con sus propios métodos, imponiendo el control sobre la producción y otorgando un programa de salida a la crisis, es la condición indispensable para la puesta en pie de un partido revolucionario en Venezuela, como sección nacional de la IV Internacional reconstruida. Llamamos a las corrientes que reivindican la lucha por la dictadura del proletariado a una Conferencia Internacional, para discutir la salida revolucionaria, en el camino de la lucha por los Estados Unidos Socialistas de América •

¡Frenemos el genocidio en Gaza!

¡Por la destrucción del enclave sionista de Israel!



Las tendencias guerreristas se expresan al máximo en Medio Oriente, dentro de un periodo de descomposición del imperialismo y procesos de asimilación de los ex Estados obreros, donde se sigue desarrollando la crisis económica mundial, con una fuerte recesión y procesos inflacionarios en gran parte del mundo. El genocidio en Palestina por parte del enclave israelí lleva más de 10 meses y el imperialismo norteamericano no logra disciplinar a su aliado, lo que puede abrir un escenario de mayor convulsión en la región.

Hace unas semanas Netanyahu fue invitado por el Congreso norteamericano para que exponga su línea de exterminio del pueblo palestino y la anexión de Gaza y Cisjordania. Luego de su charla con un debilitado Biden, el mandatario sionista avanzó en el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, con una bomba en Teherán y a un destacado dirigente militar de Hezbollah en Beirut. Estas agresiones provocaron temor por las posibles represalias de Irán y sembraron dudas sobre la realización de las conversaciones de fin de las hostilidades que impulsa el imperialismo junto con un grupo de “países mediadores” como Egipto y Catar.

Finalmente, el pasado jueves 15/8 las negociaciones iniciaron en Doha, aunque sin la participación de Hamas, a pesar de las presiones de Catar y Egipto hacia esta organización. Estados Unidos y Europa, por su parte, presionan a Israel y a Irán para lograr un acuerdo. Por su parte, China también ha hecho esfuerzos para buscar una solución diplomática al conflicto, por el momento marginal.

El objetivo de la cumbre de Doha es alcanzar un cese al fuego en Gaza y el regreso de los secuestrados israelíes (vivos o muertos) a su patria. Sin embargo, el fracaso de las negociaciones es una posibilidad y presentarían un escenario mundial donde las potencias imperialistas se preparen para grandes enfrentamientos. Inclusive, un sector de la intelectualidad sionista empieza a instalar la idea de que una nueva “diáspora” y hasta un nuevo “galut” (exilio) son una posibilidad, la cual se funda en la inmensa ola de emigración del enclave que comenzó en octubre del año pasado.

Estados Unidos, con una frágil situación interna y una gran incertidumbre sobre el resultado del proceso electoral que culminará a fin de año, ha dejado entender que estaría dispuesto a soltarle la mano a Netanyahu en caso de que el plan de paz se frustre. El mismo 15 de agosto, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, anunció ante el parlamento turco que emprenderá un viaje a la Franja de Gaza con el objetivo de intentar poner fin a los bombardeos de Israel sobre la Franja, como muestra de buena voluntad para una “negociación política” para conseguir la paz. Lo cierto es que, la diplomacia burguesa, a través de organizaciones proimperialistas como la ONU o de organismos representantes de las burguesías nacionales árabes como los gobiernos de Catar y Egipto y la ANP nada han logrado en estas más de siete décadas de lucha del pueblo palestino contra la ocupación sionista y esto se debe a que no están dispuestos a enfrentar al enclave de ocupación. El apoyo incondicional del imperialismo a

este enclave se funda en la importancia de su creación a partir de los pactos de posguerra y el establecimiento de un orden mundial, que hoy se tambalea.

La vía para detener el genocidio sionista y acabar con la opresión nacional de pueblo palestino sólo puede ser planteada por el proletariado mundial, apelando a sus métodos de clase. Esto implica paralizar la maquinaria bélica, de lo cual hemos tenido muestras en los bloqueos al envío de suministros por parte de organizaciones obreras estadounidenses e italianas (sólo por nombrar algunos ejemplos). En Europa han sido masivas las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino, a pesar de la represión de sus Estados. Pero para avanzar efectivamente en parar este genocidio, debemos afectar los intereses imperialistas en la producción. Para esto es necesaria la más férrea unidad de clase, lo cual implica enfrentar concretamente a las burguesías de los propios países y a sus mediaciones, centralmente a la burocracia sindical que los sostiene. Esto se logrará poniendo en pie una dirección revolucionaria, con partidos nacionales que sean secciones de la IV Internacional reconstruida. La expulsión del imperialismo de la región será tarea central, enfrentando a los gobiernos árabes y la teocracia iraní, así como a las direcciones burguesas y pequeñoburguesas que no ofrecen ninguna salida a las aspiraciones de liberación nacional de los palestinos como Hamas. El proletariado revolucionario debe plantear al unísono: ¡Por la destrucción del enclave sionista de Israel, para construir una Federación de Repúblicas Socialistas en Medio Oriente! ●

De COR Argentina. Publicado en cor-digital.org, 18 Agosto 2024

CORRIENTE OBRERA REVOLUCIONARIA es integrante de la **TENDENCIA POR LA RECONSTRUCCION DE LA CUARTA INTERNACIONAL**

CORCHILE@HOTMAIL.COM

WWW.TRCI-WEB.ORG